

Medellín, 10 de agosto de 2021

Señores

**JUZGADO 33 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN,  
ANTIOQUIA.**

**E. S. D.**

**REF.** Contestación Acción de Tutela.

**Accionante:** RAMON TADEO NIEBLES CARCAMO

**Accionado:** AXA COLPATRIA ARL

**Vinculado:** EPS SURAMERICANA S.A.

**Radicado:** 2021-0177

**VERÓNICA VELÁSQUEZ ZULUAGA**, obrando en mi condición de Representante Legal Judicial de la compañía **EPS SURAMERICANA S.A. NIT 800.088.702**, en adelante **EPS SURA**, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal que se adjunta al presente escrito, respetuosamente doy **CONTESTACIÓN** dentro del término judicial señalado a la acción de tutela interpuesta por la parte accionante, de la siguiente manera:

### **A LOS HECHOS:**

El accionante **RAMON TADEO NIEBLES CARCAMO** se encuentra afiliado al Plan de Beneficios de Salud (PBS) de EPS SURA en calidad de **COTIZANTE ACTIVO**, y **TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL**.

Se le pone de presente al despacho que según los hechos de la acción de tutela y los documentos aportados, el mismo tuvo un accidente de trabajo el día 04 de diciembre de 2016, por ende las solicitud que realiza la accionante debe ser cubierta por la ARL ya que las prestaciones en salud son generadas como **origen laboral**.

Adicionalmente, presenta dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el día 20/12/2018 con PCL del 33% de origen Accidente de Trabajo y fecha de estructuración del 18/08/2017 para las patologías: Quemaduras que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo y Trastornos de adaptación, por lo tanto la solicitud que realiza el accionante debe ser cubierta por la ARL ya que es secuela del evento laboral

En ese sentido, la entidad responsable de dar cobertura es la ARL, según lo establece el artículo 5 del decreto 1295 de 1994:

«artículo 5º. prestaciones asistenciales.

todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el caso, a:

- a) asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica;
- b) servicios de hospitalización;
- c) servicio odontológico;
- d) suministro de medicamentos;
- e) servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento;

- f) prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende;
- g) rehabilitaciones física y profesional;
- h) gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la prestación de estos servicios.

Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que tengan relación directa con la atención del riesgo profesional, están a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente.

Por lo anterior, EPS SURA no es la llamada a satisfacer las pretensiones del accionante, toda vez que las prestaciones que se solicitan se derivan de un **accidente laboral** y, por lo tanto, la ARL debe asumir las prestaciones económicas y asistenciales de esta patología.

De acuerdo a los hechos y las pruebas presentadas, se evidencia que EPS SURA no es la llamada a satisfacer las pretensiones de la presente acción de tutela y por lo tanto debe ser desvinculada del trámite.

## FUNDAMENTO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL

### 1- Concepto del Ministerio de Trabajo

Al respecto y según concepto del Ministerio de Trabajo 08SE2018120300000040893 de 30 de octubre de 2018

“(…)En el Régimen Contributivo, el que se presenta cuando el Funcionario o Trabajador, sufren alguna contingencia que genera incapacidad laboral, la Entidad Promotora de Salud, en adelante, EPS., tanto en la contingencia de origen común, como en la de origen laboral especialmente en la enfermedad laboral, pues en la mayoría de los casos cuando se trata de accidente de trabajo, por su naturaleza, sin discusión del origen, se encarga la Administradora de Riesgos Laborales, desde el inicio; la E.P.S., es la encargada de establecer el origen de la contingencia, con la consecuente obligación de dar entre el día 120 y el día 150 de incapacidad laboral, el parte de rehabilitación o su negativa al Fondo que Administra la Pensión, en caso de contingencia de origen común o a la Administradora de Riesgos Laborales, en caso de contingencia de origen laboral, para efectos de la rehabilitación respectiva para que el Funcionario o el Trabajador, con posterioridad a su culminación, continúe laborando o, en caso de parte negativo de rehabilitación, la calificación de pérdida de la capacidad laboral, si la hubiere con el porcentaje respectivo, caso en el cual si éste es 50%, o más, tanto la Administradora de Pensiones, como la Administrador de Riesgos Laborales, en caso de contingencia de origen común o laboral, respectivamente, otorgarán la pensión de invalidez, determinando el grado de la misma.

Cabe manifestar que todas las actuaciones aquí descritas hasta la culminación del respectivo proceso, deben ser comunicadas a las partes, para que si el Funcionario o el Trabajador, quienes no se encuentran de acuerdo con las determinaciones tomadas en cada instancia o etapa de los procesos, pueda interponer los recursos respectivos o manifestar su desacuerdo, para que en caso de presentarse esta situación, el interesado pueda ejercitar su derecho de defensa o con posterioridad, si el resultado no es de su satisfacción, pueda acudir ante la Junta de Calificación de Invalidez, Regional y Nacional y si ello no fuera satisfactorio, continuar el proceso ante la Justicia Laboral, la única que a

través de sus Autoridades, con competencia exclusiva y excluyente para declarar derechos y definir controversias, sería la encargada de definir la situación planteada a su consideración.(...)”.

## **2- No existe vulneración de derecho fundamental**

El artículo 86 de la Constitución Política ha consagrado la acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados por sus normas reglamentarias, siempre que quien la invoque, no disponga para el efecto de otros medios de defensa judiciales.

A su vez, sobre la procedencia de la acción de tutela el artículo 5° del Decreto 2591 de A 1991 establece: “PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA: La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.

## **3- Improcedencia de la acción de tutela por inexistencia de violación a derecho fundamental alguno del accionante**

Establece el artículo 86 de la Constitución Política que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar de los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados (...)”.

La definición atrás señalada, precisa como condición indispensable de procedencia de la acción de tutela que los derechos fundamentales resulten vulnerados y/o amenazados. Así, frente a la acción de tutela se requiere que la vulneración o amenaza sean situaciones objetivamente comprobables por el juez de tutela y permita deducir claramente la trasgresión o quebrantamiento del precepto constitucional

Así las cosas, la Acción de Tutela prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental, está establecida como un mecanismo procesal complementario, específico y directo cuyo objeto es la protección concreta e inmediata de derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos sean violados o se presente amenaza de su violación.

Sobre el particular la honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones indicando que:

"No cabe la tutela si no se conculca derecho fundamental alguno, ni se puede acudir a ella simplemente cuando se tiene una inconformidad o un malestar contra una autoridad pública o contra un particular. El objeto de la tutela consiste en la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, en ésta

última hipótesis en los casos y dentro de las condiciones contempladas en la ley -artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

De esa manera, para que sea pertinente instaurar una acción de tutela es necesario que por lo menos exista un motivo relacionado con los derechos fundamentales de las personas puestos en peligro o vulnerados de manera que la orden judicial sea medio adecuado para amparar al peticionario garantizándole el disfrute de aquellos.

Es decir, que es indispensable la proporcionalidad entre los hechos alegados por el accionante y la protección judicial que solicita. Así pues, no todo conflicto debe ser resuelto a través de la acción de tutela como único mecanismo de solución si la misma naturaleza de la relación de que se trata ofrece diversas opciones o posibilidades suficientes para determinar cómo poner fin a la controversia.

Ha sido criterio de esta Corte, como así lo ha venido expresando en diversas providencias, que la judicialización de todo problema suscitado entre individuos o colectividades no conduce a nada distinto de la innecesaria congestión de los tribunales con el consiguiente bloqueo a las causas que en verdad requieren de la intervención del juez, lo cual además perjudica en grado sumo el normal funcionamiento de las instituciones en cuanto distrae sin objeto la atención y el esfuerzo de las autoridades judiciales".

### PETICIÓN

Conforme a la respuesta dada a los hechos, las pruebas adjuntas y el fundamento jurídico y jurisprudencial, solicito de manera respetuosa Señor Juez, **NEGAR** el amparo constitucional solicitado por la parte accionante y, en consecuencia, declarar la **IMPROCEDENCIA** de esta acción de tutela por no vulneración de un derecho fundamental por parte de **EPS SURA**.

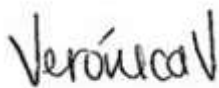
### PRUEBAS Y ANEXOS

1. Certificado de existencia y representación legal de EPS SURA.
2. Información de afiliación.
3. Dictamen PCL.
4. Historial de utilización.

### NOTIFICACIONES

Las recibiré en la **Calle 49 B No. 63-21. Piso 1 en Medellín**. Correo electrónico: [notificacionesjudiciales@epssura.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@epssura.com.co)

Del señor Juez,



**VERÓNICA VELÁSQUEZ ZULUAGA**  
**C. C. No. 1.017.203.764**  
**Representante legal de EPS SURA**

Identificación	CC 3443178
Nombre	RAMON TADEO NIEBLES CARCAMO
Planes de Salud	POS: Sí, Prepagada: No, PCS: No
Cobertura	
Urgencias desde	01/01/2017
Cobertura Integral desde	01/01/2017
Cobertura Integral hasta	31/12/3000
Protección Laboral hasta	31/12/3000
Fin del contrato desde	10/12/3000
Semanas cotizadas	51
Último año	51
EPS anterior	0
Desde última pérdida antigüedad	236
Estado de suspensión	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
Teléfono	4514826
IPS del Afiliado	2702
Nombre IPS del Afiliado	COOMSOCIAL BELLO
Marcación Especial por mora	
Información del empleador	
Identificación	NI 890937250
Razón Social	UNION ELECTRICA S A
Tipo de afiliado	COTIZANTE ACTIVO
IBC de los cotizantes del grupo familiar	
Cotizante principal	RAMON TADEO NIEBLES CARCAMO
IBC Cotizante principal	\$0 (de 05/08/2021)
IBC Cónyuge	\$0
Clasificación de ingresos	A INGRESOS MENORES DE 2 SML
Código Municipio	05088

Información de afiliaciones del beneficiado